

del Regidor responsable del acto que se reclamaba, asentando el hecho como lo ha referido el quejoso, y explicando que se verificó porque Cruz estaba comprómetido por una cantidad de tejas con el Ayuntamiento, que le había con anterioridad solicitado operarios para su fabricación y le había dado dinero á cuenta, y que no había tomado las tejas por que el que se dice dueño de ellas no había justificado su propiedad. Vistas las demás constancias de autos y considerando que la materia sobre que versa el presente recurso de amparo, constituye una cuestión de derecho civil del conocimiento de la autoridad judicial, sin que de lo alegado y probado resulte la violación de garantías reclamada. Con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869 se resuelve lo siguiente: Es de confirmarse y se confirma la sentencia que en 24 de Setiembre próximo pasado pronunció en San Cristóbal Las Casas el juez de Distrito del Estado de Chiapas, declarándose que la Justicia de la Union Federal ampara y protege al C. Espiridion López, contra el acto del Regidor C. Yañuario López, en virtud del cual se apoderó de la cantidad de tres mil cien tejas que el primero alega ser de su propiedad.

Devuélvansé sus actuaciones al Juzgado de Distrito de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazón.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Aza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre 22 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Ramon Felín apoderado del Sr. su padre D. Hermenegildo, contra los autos y providencias dictadas por los CC. Licenciados Francisco Alfaro y Antonio Llata, como ministros del Superior Tribunal de Justicia del Estado, en el juicio que D. Luis Matuverria sigue contra el expresado D. Hermenegildo sobre rentas, alegando el quejoso que hay violación de garantías, puesto que no procede de elección popular el nombramiento de los Sres. Alfaro y Llata.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que el C. Ramon Felín, en representación del Sr. su padre D. Hermenegildo, ha seguido un juicio ejecutivo en uno de los Juzgados de primera instancia del Distrito del Centro de este Estado, oponiéndose á las acciones que en su contra deduce D. Luis Matuverria. Elevados los autos al Tribunal Superior para la calificación del grado de la sentencia de remate, conforme á la ley orgánica local, fueron devueltos al Juzgado de su origen para la ejecución del fallo. Tales son en resumen los hechos que motivan el presente juicio de amparo, que se ha introducido por el ejecutado en el civil respectivo; fundándose en la falta de jurisdicción de los CC. Magistrados que hicieron la calificación enunciada. Esta falta absoluta de jurisdicción descansa en vicios de elección de los Ministros que la ejercen actualmente, quienes carecen de poderes delegados por el pueblo queretano para administrar justicia en su nombre; y por ella cree el quejoso violada en su persona la garantía que otorga el art. 16 de la Constitución Federal.

El Promotor fiscal considera que la competencia de autoridad á que se re-

fiere la última parte del artículo citado debe tomarse en un sentido estricto, haciendo relación á su carácter y nunca á su origen; pues de otra manera habria que entrometerse á juzgar según la legislación peculiar de cada Estado los diversos casos ocurientes; cosa que excede los límites de la jurisdicción federal. Basta que los Magistrados cuya competencia se niega hayan sido declarados, como teniendo ese carácter por la Legislatura del Estado, y que esta á su vez haya decidido las cuestiones electorales que provoca el quejoso, para que hoy no vuelvan á tocarse y mucho menos por la autoridad federal á quien corresponde respetar la independencia de los Estados en lo que toca á su régimen interior. Y que la Legislatura del Estado de Querétaro fué competente para decidir las dudas que pudieron ofrecerse en la elección de sus miembros y declarar quiénes fueron electos Magistrados, nos lo dicen los artículos 63 y 40 de la particular Constitución del mismo Estado. También cree el quejoso violada en su persona la garantía del art. 13 de la Carta federal, considerando especial al Tribunal que lo juzga. Ese artículo abolió los juicios por comisión y los diversos fueros de guerra, eclesiástico, de comercio y marina que estorbaban el ejercicio del fuero comun, cuya ampliación fué desde entonces precepto constitucional. Esta es la natural y genuina interpretación de esa parte del artículo referido; por la que se ve que nunca puede reputarse especial un Tribunal que conoce en 2ª instancia de todos los negocios que la admiten pertenecientes á todos los habitantes de Querétaro, que en cuanto á este punto, no gozan de mejores garantías que las que puedan disfrutar Feliú y Matuverria, contendientes en el juicio cuya paralización se pretende por esta vía. No siendo un Tribunal nombrado para decidir esa contienda entre dos súbditos españoles, el

de Querétaro carece del carácter de especialidad que se le atribuye.

En cuanto á las aberraciones de los poderes del Estado, hay que tener en cuenta que no nos toca enmendarlas, mientras que no violen las garantías individuales cuyos guardianes somos. Si el poder Ejecutivo funciona contra la prohibición expresa del art. 77 del Código local; si el Legislativo es ilegal desde su nombramiento ó instalación; y si el Judicial adolece de vicios electorales, es preciso recordar que cuando los poderes en cuya división estriba el equilibrio constitucional se unen para destruirlo, se hace imposible defender los derechos y las libertades del pueblo, contra toda usurpación. El único adecuado remedio para garantizar el ejercicio de una Constitución, consiste en poner un freno á los ilegales procedimientos del poder Legislativo que en todo gobierno es el poder predominante, y cuya acción es casi irresistible. Y cuando ese remedio no existe, fuerza es conformarse con un mal cuyo correctivo vendrá más tarde.

Por estas consideraciones, el Promotor fiscal pide: que se niegue al C. Hermenegildo Feliú el amparo que solicita.

Querétaro, Agosto 23 de 1872.—*Luis Castañeda.*

Són copias: Querétaro, Setiembre 22 de 1872.—*Francisco Ruiz.*

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Querétaro, Setiembre 18 de 1872.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Ramon Feliú, apoderado del Sr. su padre D. Hermenegildo Feliú, contra los autos y providencias dictadas por los CC. Licenciados Francisco Alfaro y Antonio Llata como Ministros del Tribunal superior de Justicia de este Estado de Querétaro, en el juicio que D. Luis

Matuverria sigue contra el expresado D. Hermenegildo sobre rentas; el escrito de queja de fojas 3; el oficio de fojas 8 remitido á este Juzgado por el Presidente de dicho tribunal en contestacion al informe pedido á los CC. Llata y Alfaro; el pedimento fiscal de fojas 9 á la 11; el auto de fojas 14 y 15 vuelta, en que negó la suspension de los actos reclamados; el segundo pedimento fiscal de fojas 17 á la 20; las pruebas rendidas; alegatos de la parte de Feliú; citacion para sentencia y todo lo demas que ver y tener presente convino:

Primero; considerando: que la parte del C. Ramon O. Feliú al instaurar el presente juicio de amparo, lo ha hecho fundándose en el art. 1º, frac. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869 y en los 13, 16 y 109 de la Constitucion general de la República, asegurando que por infraccion de ellos le han violado los CC. Antonio Llata y Francisco Alfaro, con el ejercicio de la autoridad que no tienen, las garantías que aquellos le conceden.

Segundo; que las pruebas rendidas por dicha parte, todas ellas vienen confirmando la competencia de los expresados CC. Llata y Alfaro, como Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de este Estado, por no haber sido electos popularmente, faltándose así al art. 96 del Código local y al 109 del federal.

Tercero; que como la prevencion del art. 16 de la Constitucion de la República es que todos los ciudadanos gocen la garantía, de que siempre que sean molestados en sus personas, familias, posesiones, etc., estas molestias sean inferidas por autoridad competente; con cuyo mandato se tiene, no solo la prohibicion de que el particular cometa el ataque, pero ni aun el que esté revestido de alguna autoridad, no siendo la que legalmente le corresponde; encontrándose en el caso las autoridades de hecho, las cuales se tienen segun los autores como personas privadas.

Cuarto; que conforme á las pruebas del quejoso, no son Ministros del Tribunal de Justicia los CC. Antonio de la Llata y Francisco Alfaro, porque para que lo fueran, era indispensable que su nombramiento se los hubiera dado el voto del pueblo, atento el sistema que nos rige, la prevencion del art. 96 de la Constitucion local y el 109 de la general, y si bien es cierto que de autos consta (fojas 85) que el Congreso nombró á aquellos Ministros, tambien lo es que tres de los seis Distritos que componen el Estado no los eligieron. Que por esta falta de postulacion en los tres Distritos, debió repetirse en todos los seis conforme á la frac. 5ª, del art. 71 y el 72 de la ley electoral de 12 de Noviembre de 1870, lo cual no se verificó como lo declaran uniformemente siete testigos (fojas 104 á 107): que aunque parece, segun los términos del decreto núm. 3, fs. 56 vuelta, que se mandó hacer la eleccion de Ministros, Gobernador y Vice en los referidos tres Distritos que no habian sufragado, esta no llegó á verificarse; de manera que la legislatura nombró interinamente Gobernador y Ministros, confesando en ello no haber habido eleccion, y despues, sin haber mediado esta, declaró Ministros propietarios á los CC. Llata y Alfaro por medio de su decreto núm. 35 (fojas 85).

Quinto; considerando: que el congreso del Estado carecia realmente de facultades para hacer la eleccion de dichos Ministros, por el deber que tenia de observar la Constitucion y leyes citadas. Y esto, suponiendo que el congreso fuera legítimo, pues de autos consta lo contrario.

Sexto; considerando: no será exacto lo asentado por el C. Feliú de que por ser incompetentes los Magistrados Llata y Alfaro sean jueces especiales, pues que su nombramiento no solo fué dado para ciertas personas y para determinados negocios, sino para todas y todos los del

fuero común, como se ve del contesto del decreto citado de fojas 85.

Sétimo; considerando: no es la ejecución del fallo pronunciado por el juez del Estado, ni tampoco los vicios de elección de los Ministros, lo que ha ocasionado el presente juicio como malamente asentó el O. Promotor fiscal en su pedimento de fojas 19 vuelta, sino la incompetencia ó falta absoluta de jurisdicción de los CO. Alfaro y Llata para conocer en el negocio judicial que pasaba por apelación al Tribunal de Justicia en donde ellos fungen de Magistrados sin serlo por las razones anteriores, como consta, ya de los escritos del actor, ya también de las pruebas que al efecto adujo.

Octavo; considerando: que el punto principal de la cuestión de que se trata en estos autos, como se ha indicado, es la inobservancia del art. 109 de la Constitución de 1857, y que los Juzgados de la federación son los competentes para conocer de todas las controversias sobre cumplimiento y aplicación de leyes federales, según el art. 97 de ella misma. A que se agrega, que los Juzgados de Distrito tienen establecida su competencia para conocer de los juicios sobre violación de garantías, y las infracciones del citado art. 109 traen consigo inevitablemente tal violación; lo uno, porque el art. 1º de la Carta fundamental declara: que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, y lo otro, porque infringir el tantas veces repetido art. 109, es destruir en los Estados la forma *tutelar de gobierno republicano*, lo cual es herir en su raíz todas las garantías del individuo, ó sea todos los derechos del hombre, en la circunstancia especial del caso, que faltando en las autoridades la elección del pueblo, carecen de título legítimo y no pueden figurar en el número de los competentes, lo que hace renacer en los ciudadanos, llegado el caso, el derecho de quejarse por infracción de la garantía parti-

cular establecida por el art. 16 que previene: "que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles etc., sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente" etc.

Por estos considerandos y con fundamento del art. 1º, fracción 1ª de la ley de 20 de Enero de 1869, de los 16 y 102 de la Constitución general de la República, por las doctrinas recibidas en la práctica de los autores Toqueville, Story, Comentarios de la Constitución americana, Laboulaye, y además atenta la opinión de varias personas de acreditada ilustración, de la capital de la República, á quienes este Juzgado les dirigió consulta, fallo:

1º: Que la Justicia Federal no ampara ni protege al O. Ramón O. Feliú, como apoderado del señor su padre, respecto á la garantía que creyó violada por infracción del art. 13 de la Constitución. 2º: La Justicia Federal ampara y protege al predicho ciudadano contra la autoridad que ejercen los Magistrados del Tribunal de Justicia del Estado, Francisco Alfaro y Antonio Llata, en el juicio que en su contra sigue el O. Luis Matuverria. 3º: Repóngase por la parte de Feliú, con papel del sello correspondiente, el que se usó del común para no interrumpir la secuela de este juicio. 4º: Hágase saber; sáquense copias de esta sentencia para que se publiquen en el "Diario Oficial" y "Semanario Judicial" y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo mandó y firmó el O. juez 1º suplente de Distrito de este Estado Lic. Mariano Pimentel, por ante mí: doy fé.—*Mariano Pimentel*.—Ante mí, *Francisco Ruiz*.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 19 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el

Juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Ramon O. Feliú, apoderado del Sr. su padre D. Hermenegildo Feliú contra los autos y providencias dictadas por los CC. Licenciados Francisco Alfaro y Antonio Llata, como Ministros del Superior Tribunal de Justicia del Estado, en el juicio que D. Luis Mutaverria sigue contra el expresado D. Hermenegildo sobre rentas; alegando: que por el hecho de conocer en el juicio referido los CC. Magistrados Alfaro y Llata, cuya eleccion se dice por los quejosos no proceder de eleccion popular, se infringen los artículos 13, 16 y 109 de la Constitucion general de la República. Vistas las constancias de autos y considerando, en cuanto al art. 13 de la Constitucion, que los Ministros del Tribunal Superior de Querétaro Alfaro y Llata, no han sido nombrados para conocer especialmente de un negocio, sino de todos los que por la jurisdiccion como Magistrados de ese Tribunal les están encomendados. Considerando: en cuanto á la incompetencia objetada por Feliú á los Ministros Alfaro y Llata: que tal incompetencia llamada *de origen* por el vicio que se atribuye al nombramiento de Magistrados, debe considerarse comprendida como cualquiera otra en el art. 16 de la Constitucion Federal, puesto que ella no hace distincion ni excepcion alguna. Que admitir esa distincion y excepcion por salvar la independencia y soberanía de los Estados en su régimen interior, menospreciando al individuo quejoso, seria sacrificar los derechos del hombre que son el fin, á la institucion, que es el medio (art. 1º de la Constitucion). Que para mayor garantía de los derechos del hombre, la independencia misma y la soberanía de los Estados se encuentra restringida por el art. 109 de la Constitucion Federal, que les impone el deber de adoptar la forma de gobierno representativo popular, de manera que se veria infringido ademas este precepto constitucional si la incompeten-

cia que se objeta á la autoridad fuera por su origen contraria á esa forma de gobierno.

Que por tales razones y para no dejar violada una garantía individual ni quebrantando un precepto constitucional, se hace indispensable entrar en el exámen de si los Magistrados Alfaro y Llata han sido bien nombrados bajo el punto de vista de la Constitucion Federal.

Que una vez impuesta á los Estados la forma de gobierno representativo popular, y consistiendo esta forma esencialmente en que, por lo menos, los poderes supremos sean electos como se consigna por la misma Constitucion del Estado, es consecuente que los Magistrados que forman el Tribunal Superior de Querétaro no pueden ser nombrados sino por eleccion popular, ó de lo contrario serán incompetentes.

Considerando en cuanto á si hubo ó no elecciones en Querétaro para el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Superior:

Que la autoridad responsable se negó á dar el informe que previene el art. 9 de la ley de 20 de Enero de 1869, protestando que no era la inmediata ejecutora del acto reclamado.

Que por tal motivo el Juzgado de Distrito se vió en el caso de sustanciar el juicio sin ese informe y sin los demas datos que pidió y se le negaron.

Que el quejoso ha probado suficientemente y sin objecion alguna por parte del Fiscal, que no ha habido en Querétaro tales elecciones populares: 1º por la declaracion de siete testigos contestes y mayores de toda excepcion; y 2º por la presentacion de toda la serie de decretos expedidos por la Legislatura hasta la declaracion de Magistrados; entre los que no se encuentra el decreto de convocatoria y que fijara los dias en que debieran hacerse las elecciones populares en los seis distritos del Estado.

Que los documentos originales ó en



copias certificadas que se han remitido á esta Corte Suprema de Justicia por el Tribunal Superior, por la Legislatura y el Ejecutivo del Estado, podrian haberse apreciado jurídicamente ante el juez de Distrito bajo la contradicción de las partes, pero no pueden serlo bajo la misma contradicción por la Suprema Corte de Justicia, que conforme al art. 15 de la ley de 20 de Enero de 1869, debe sentenciar sin nueva sustanciación ni citación de las partes.

Que por la misma razón es de desestimarse el recurso presentado por el abogado de Feliú objetando el vicio de falsedad á varios de esos documentos.

Por las razones y fundamentos expuestos se declara: 1.º Que se confirma la sentencia del Juzgado de Distrito de Querétaro en la parte que dispone que la Justicia Federal no ampara ni protege al C. Ramon O. Feliú como apoderado del Sr. su padre respecto á la garantía que creyó violada por infracción del art. 13 de la Constitución general.

2.º Que se confirma la propia sentencia en la parte que dispone que la Justicia Federal ampara y protege al predicho ciudadano, contra la autoridad que ejercen los Magistrados del Tribunal de Justicia del Estado Francisco Alfaro y Antonio Llata, en el juicio que en su contra sigue el C. Luis Matuverria.

3.º Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de Distrito de Querétaro, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos respecto de los puntos primero y tercero y por mayoría respecto del segundo lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogaszon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramí-*

*rez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Aza.—S. Guzman.—L. Velazquez.—José García Ramirez.—Ignacio M. Altamirano.*

Luis María Aguilar, secretario del Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos: Certifico: que no obra la firma del Sr. Ministro Zavala en la sentencia anterior, porque aunque asistió á la relación de este negocio, con posterioridad á ella se le concedió licencia por causa de enfermedad y salió de esta capital; pero oportunamente remitió su voto escrito que se tomó en consideración al votarse el negocio.

México, Octubre 31 de 1872.—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Octubre 31 de 1872.—*Luis María Aguilar*, secretario.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Campeche por los Sres. D. Joaquin Gutiérrez y C<sup>ta</sup>, contra el cobro que les hace el capitán del puerto de Campeche por cada arribo de la canoa «Faustina» procedente de Champetón.

#### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez:

El Promotor fiscal dice: Las presentes diligencias contienen una solicitud de amparo de los Sres. Joaquin Gutiérrez y compañía, de este comercio, creyendo violada en ellos la garantía consignada en el artículo 14 de la Constitución Federal con el cobro de un derecho que se les hace al arribo de su canoa «Faustina», y un informe de la autoridad que se supone violadora y que es el capitán de nuestro puerto.

Los fundamentos de los primeros consisten: en que previniendo el art. 14 del nuevo arancel que «los buques nacionales están exentos de todos los derechos de puerto, con excepción del de